



**Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes**

Distr.
GENERAL

CAT/C/SR.826
4 de junio de 2008

ESPAÑOL
Original: FRANCÉS

COMITÉ CONTRA LA TORTURA

40º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 826ª SESIÓN

celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,
el 9 de mayo de 2008 a las 10.00 horas

Presidente: Sr. GROSSMAN

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN (continuación)

Tercer informe periódico de Islandia

La presente acta está sujeta a correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se consolidarán en una sola corrección que se publicará poco después de finalizar el período de sesiones.

GE.08-42106 (S0 NY.09-55861 (S)

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN (tema 7 del programa) (continuación)

Tercer informe periódico de Islandia (HRI/CORE/1/Add.26; CAT/C/ISL/3; CAT/C/ISL/Q/3; CAT/C/ISL/Q/3/Add.1)

1. *Por invitación del Presidente, la Sra. Kristinsdóttir, el Sr. Jónsson y la Sra. Helgadóttir toman asiento a la mesa del Comité.*

2. La Sra. KRISTINSDÓTTIR (Islandia) dice que el tercer informe periódico transmitido al Comité incluye errores o imprecisiones que desearía corregir. En el párrafo 9, relativo a la Ley de protección del niño, se indica erróneamente que el Ministro de Justicia puede disponer la reglamentación sobre las medidas coercitivas o disciplinarias. En realidad, se trata de una atribución del Ministro de Asuntos Sociales. Por otra parte habría que aclarar que, en el cuadro del párrafo 18, las cifras de la columna “Deportaciones” incluyen las salidas voluntarias, de modo que el número de deportaciones forzadas es muy inferior al indicado. Las cifras correspondientes a las solicitudes retiradas tienen en cuenta las solicitudes tramitadas en el marco de las normas de cooperación de los Acuerdos de Dublín, que regulan la atribución de la decisión en materia de asilo. En la respuesta escrita a la pregunta 8 se indica que ninguna de las personas que presentaron una solicitud de asilo durante el período 2001-2005 podía considerarse como “refugiado” en el sentido de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. No obstante, cabe precisar que en los casos a los que son aplicables los Acuerdos de Dublín, las autoridades islandesas no se pronuncian acerca de si el solicitante reúne los criterios enunciados en la Convención.

3. Las principales medidas adoptadas desde el examen anterior de la aplicación de la Convención contra la Tortura por parte de Islandia se exponen en el informe, pero resultaría útil recapitularlas y, de ser necesario, aportar precisiones o nuevos elementos de información en beneficio del diálogo que se celebrará en el futuro. Así, la Ley núm. 48/1988 de prisiones y encarcelamiento se sustituyó por la Ley núm. 49/2005 de cumplimiento de sanciones. Esa nueva ley se elaboró teniendo en cuenta, en particular, las Normas Penitenciarias Europeas publicadas por el Consejo de Europa y las opiniones emitidas por el Defensor del Pueblo sobre temas relacionados con la reclusión. Esa ley reúne en un solo texto numerosas disposiciones de leyes y reglamentos diversos, y define los derechos y obligaciones de las personas condenadas. Se esclarecieron las normas vigentes, se reforzaron determinadas disposiciones y se introdujeron varias innovaciones.

4. El reglamento núm. 179/1992 de detención preventiva se sustituyó por el reglamento de cumplimiento de sanciones, publicado el 8 de noviembre de 2005 (párr. 7 del informe). Ese reglamento contiene 25 artículos en que se enuncian disposiciones detalladas, por ejemplo, sobre el papel de la Administración de Prisiones y Libertad Condicional, el trabajo en prisión, los estudios, el trabajo o la formación profesional en el exterior, la presencia de lactantes en las prisiones, las modalidades y la vigilancia de las visitas, el acceso de los detenidos a los medios de comunicación, la puesta en libertad condicional y la detención preventiva, y el procesamiento de datos personales.

5. En la nueva Ley de cumplimiento de sanciones se suprime la distinción entre cárceles para condenados y centros de reclusión preventiva, que, de hecho, no existían desde hacía muchos años en Islandia. Como se indica en la respuesta escrita a la pregunta 2, la supresión de esta distinción se explica en particular por el hecho de que resultaba difícil garantizar a los detenidos a la espera de juicio, debido a su reducido número, servicios satisfactorios si se les mantenía en un centro de detención separado. Sin embargo, el hecho de que se hallen detenidos junto con presos que cumplen una pena no compromete en absoluto la presunción de inocencia. Se trata simplemente de evitar que se encuentren totalmente aislados y de darles acceso a los servicios que se ofrecen en los establecimientos penitenciarios.
6. El promedio de detenidos a la espera de juicio, que ascendía a 16,9 en 2005, no ha evolucionado. Esa cifra era de 17 en 2006 y 15 en 2007, y, de ellos, 14 en 2006 y 13 en 2007 no se encontraban en régimen de incomunicación.
7. Entre otras novedades que se introdujeron desde la elaboración del informe, cabe destacar la sustitución de la Ley núm. 25/1967 de guardacostas, que no establecía ninguna norma especial para que los guardacostas usasen la fuerza, por una nueva ley (núm. 52/2006), que impone a estos últimos la obligación de respetar la Ley de policía y el Código de Procedimiento Penal, y la publicación, el 29 de marzo de 2007, de un nuevo reglamento sobre el adiestramiento de los guardias de prisiones, en aplicación de la Ley de cumplimiento de sanciones. El adiestramiento previsto en ese reglamento hace hincapié en los derechos fundamentales y el respeto de la dignidad de los detenidos, mediante el estudio de las disposiciones de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como de las disposiciones establecidas por los órganos y comités internacionales que se ocupan de la situación de los detenidos. Los requisitos de contratación que prevé el nuevo reglamento son los mismos que los del reglamento anterior, que se enumeran en el párrafo 27 del informe.
8. La Sra. Kristinsdóttir desea comentar, en especial, dos de las recomendaciones formuladas por el Comité con ocasión del examen del segundo informe periódico de Islandia, a saber: que se tipifique como delito la tortura en Islandia y que la legislación sobre las pruebas que se aporten en actuaciones judiciales se ajuste a lo dispuesto en el artículo 15 de la Convención a fin de excluir explícitamente toda prueba obtenida de resultados de tortura.
9. En su informe inicial, Islandia repasaba los textos legislativos islandeses que recogían disposiciones que prohibían la tortura. En su segundo informe explicaba detalladamente que, aunque la ley no recoge una definición de tortura, lo que debía entenderse por ese término no daba lugar a duda alguna, como tampoco que la ley sancionaba la tortura. En su tercer informe, Islandia mantiene los argumentos avanzados anteriormente.
10. En ese contexto y a la luz del principio general de derecho islandés según el cual las disposiciones legislativas se han de interpretar de conformidad con las obligaciones derivadas del derecho internacional, no cabe duda de que los tribunales de Islandia interpretarían el término “tortura” con arreglo al artículo 1 de la Convención si tuvieran que pronunciarse en la materia. Asimismo, cabe señalar que las disposiciones de la Constitución de Islandia y el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos tienen un alcance algo más amplio que el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, puesto que no incluyen únicamente los actos cometidos por funcionarios públicos, sino que se extienden a todos. Cabe mencionar, igualmente, que numerosos términos genéricos que se emplean en el derecho islandés no están definidos en el Código Penal,

como, por ejemplo, los términos “violación” o “asesinato”, sin que por ello se pueda pretender que dichos actos no constituyen una infracción penal en virtud de la legislación islandesa. Lo importante no es tanto el término empleado para designar un comportamiento, sino la calificación de dicho comportamiento como infracción. Por ello, el Gobierno considera que el derecho islandés incluye disposiciones satisfactorias que se aplican a la tortura, tanto física como psicológica, como prevé el artículo 1 de la Convención.

11. En relación con el artículo 15 de la Convención, en los dos informes anteriores de Islandia figura una descripción detallada de los textos legislativos que hacen referencia a ese artículo. Cabe destacar que el procedimiento penal obedece al principio de la libre evaluación del juez de las pruebas aducidas ante el tribunal. Sin embargo, en una causa penal, el juez debe ajustarse a la Constitución, según la cual se presupone que toda persona acusada de haber cometido un delito es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Así pues, la carga de la prueba corresponde a la acusación. Otro principio importante en ese contexto es el de la utilización de pruebas directas, que se enuncia en el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal. La sentencia debe basarse en pruebas aducidas ante el tribunal durante el proceso. De ese modo, los informes policiales no corroborados por declaraciones hechas durante la audiencia tienen una fuerza probatoria limitada. Las disposiciones relativas a las pruebas penales establecen que nadie puede ser condenado sobre la base de confesiones que se demuestre que son el resultado de torturas.

12. La Sra. SVEAASS (Relatora para el país) da las gracias a la delegación por la información complementaria al informe y a las respuestas escritas, que es, por otra parte, de excelente calidad. Al término del examen del informe anterior de Islandia, el Comité había destacado, entre otros aspectos positivos, que no había recibido ninguna denuncia de tortura o de malos tratos contra Islandia, y que el Estado parte había aprobado una nueva Ley de extranjería que garantizaba a los extranjeros una mayor protección. Entre otras recomendaciones, el Comité había instado al Estado parte a que tipificara la tortura como delito en Islandia, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, y que ajustara la legislación sobre las pruebas que se aporten en actuaciones judiciales a lo dispuesto en el artículo 15 de la Convención. Islandia ha expuesto su posición con respecto a esas recomendaciones en su tercer informe periódico y ha facilitado informaciones complementarias sobre los suicidios en los lugares de detención, la capacitación de médicos para identificar las secuelas de la tortura, la vigilancia de los actos de violencia entre los detenidos y las medidas de intervención que se aplican en ese contexto, como había solicitado el Comité. Asimismo, el Estado parte ha adjuntado a su informe periódico el informe elaborado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura al término de la visita que realizó a Islandia en 2004.

13. El Comité concede una gran importancia a la incorporación de una definición de tortura que se ajuste a la que figura en el artículo 1 de la Convención. Además, señala sistemáticamente a la atención de los Estados parte cuya legislación no recoge una definición de tortura o cuya definición de tortura no se ajusta a la de la Convención la necesidad absoluta de incorporar dicha definición en su derecho interno. Islandia indica que la prohibición de la tortura se enuncia en el artículo 68 de la Constitución, que no existe ninguna duda acerca de lo que debe entenderse por el término “tortura”, a pesar de que este no se defina expresamente, y que, por consiguiente, no es necesario modificar la ley. Sin embargo, la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la Convención es muy precisa, pues describe los distintos elementos constitutivos de la tortura, lo que la diferencia, por ejemplo, de la definición de tortura que figura en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las medidas de sanción y prevención de la tortura están estrechamente relacionadas con esos distintos elementos. Como ha subrayado el Comité en su Observación general

sobre el artículo 2, es esencial contar con una definición clara de la tortura que tenga en cuenta todos los elementos mencionados en el artículo 1 para prevenir de forma eficaz la tortura y los malos tratos. Así pues, es imperativo que el Estado parte incorpore dicha definición en su derecho interno, en particular, ante la perspectiva de su posible adhesión al Protocolo Facultativo.

14. La tortura tampoco se tipifica como delito penal. Ninguna disposición del Código Penal islandés hace referencia expresa a la tortura. De ese modo, aunque el Estado parte afirme que los actos tipificados en su Código Penal son suficientes para garantizar que la tortura, tanto física como psicológica, sea punible en virtud de dicho Código, el Comité lo insta a revisar su posición y a tipificar la tortura como delito penal, así como a establecer sanciones proporcionales a la gravedad de los actos que incluye.

15. Otra manera decisiva de prevenir la tortura y los malos tratos consiste en crear mecanismos de vigilancia independientes. En las respuestas escritas se indica (pregunta 1) que el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo inspecciones en las cárceles y que sus observaciones se han tenido debidamente en cuenta. ¿Y qué sucede con las instituciones psiquiátricas? Además, el Defensor del Pueblo cuenta con un mandato y recursos al parecer limitados, y él mismo ha recomendado la creación de un mecanismo de vigilancia encargado específicamente de la inspección de los lugares de detención y los hospitales psiquiátricos. Resultaría útil conocer las intenciones del Estado parte a ese respecto. Quizá podría contemplarse la posibilidad de crear una institución nacional que sea conforme a los Principios de París y se base en la experiencia de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que realizan sus actividades en el ámbito de los derechos humanos.

16. De las respuestas escritas del Estado parte (pregunta 4) se desprende que este ha adoptado una serie de medidas legislativas para luchar contra la trata de seres humanos. Sería importante recibir aclaraciones sobre las disposiciones adoptadas a favor de las víctimas, sobre todo en materia de rehabilitación y atención sanitaria.

17. La delegación ha indicado que, al igual que la tortura, otros delitos, en particular la violación, no se definen expresamente en el Código Penal, sin que ello suponga un factor de impunidad. Sería deseable que se promulgasen leyes relativas específicamente a la violación, y de modo más amplio a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, infracciones que actualmente no están tipificadas como delitos, más aún cuando, según algunas informaciones, ese tipo de violencia estaría muy extendido en Islandia. Resultaría útil obtener aclaraciones a ese respecto.

18. Al parecer, se habría estudiado la posibilidad de dotar a las fuerzas de policías de pistolas neutralizantes a base de descargas eléctricas. La delegación quizá pueda indicar si continúan las deliberaciones en la materia. De ser así, el Comité insta encarecidamente al Estado parte a que renuncie a autorizar el uso de ese tipo de armas, ya que causan lesiones sumamente graves, como demuestran los numerosos informes al respecto.

19. En su respuesta a la pregunta 5, el Estado parte indica que el artículo 45 de la Ley de extranjería, que prohíbe la devolución de extranjeros a regiones donde estos tengan razones para temer su persecución, se aplicó en 18 casos entre 2001 y 2005 a personas que no podían aspirar al estatuto de refugiado. Según las cifras facilitadas en el informe, de los 394 solicitantes de asilo, 240 fueron deportados durante ese período. La delegación ha indicado que de esa cifra debían deducirse las salidas voluntarias. Quizá pueda facilitar el número exacto de deportaciones. Entre

2001 y 2008, un único solicitante de asilo de un total de 457 obtuvo el estatuto de refugiado. Por lo tanto, cabe preguntarse si los criterios que rigen la concesión del estatuto de refugiado no son demasiado estrictos y si, por consiguiente, no existe el riesgo de que se deporte a personas a países donde podrían ser sometidas a tortura. Se sabe, por ejemplo, que entre 2005 y 2007 Islandia deportó a solicitantes de asilo al Afganistán, país que no puede considerarse seguro con arreglo a la Convención.

20. Los Acuerdos de Dublín se aplican de forma implacable, como lo ilustra el caso de una joven embarazada de siete meses, originaria de Rumania, que había presentado una solicitud de asilo en Islandia y fue devuelta al Reino Unido en 2005, cuando estaba gravemente enferma, era suicida y sufría trastornos postraumáticos graves. Ese caso demuestra que es necesario tener más en cuenta las consideraciones humanitarias en el procedimiento de asilo.

21. En relación con el nuevo reglamento de guardacostas, en virtud del cual estos quedan sometidos a la Ley de policía, sería interesante saber si se han presentado denuncias de abuso de autoridad o actos de violencia cometidos por guardacostas en el ejercicio de sus funciones. Sería importante obtener aclaraciones sobre el alcance exacto de la prohibición contemplada en el artículo 45 de la Ley de extranjería. De hecho, el término “repatriación” que se utiliza en el párrafo 14 de las respuestas escritas no resulta claro. Además, al parecer no existen disposiciones específicas sobre la protección de los menores no acompañados. Sería útil obtener aclaraciones sobre esa cuestión.

22. Por lo que respecta al artículo 5, cabe recordar que la visita a Islandia, en 2003, de un alto dirigente del Partido Comunista chino, presunto responsable de delitos de tortura, genocidio y crímenes de lesa humanidad, desencadenó un intenso debate en torno a dos posibles actitudes: perseguir al interesado de conformidad con la obligación internacional que incumbe a Islandia de llevar ante la justicia a toda persona que sea culpable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos protegidos por instrumentos internacionales, entre los que figura la Convención contra la Tortura, o considerar que este se encontraba en Islandia de visita oficial y, por ello, gozaba de inmunidad diplomática. Sería interesante saber qué posición prevaleció finalmente y por qué.

23. Las actividades de la CIA en Europa suscitan una viva polémica. Del informe aprobado en 2007 por el Parlamento Europeo sobre esa cuestión se desprende que los Estados europeos generalmente cierran los ojos ante los vuelos de aviones fletados por la CIA que en ocasiones se han utilizado para trasladar ilegalmente a detenidos. En 2005, los medios de comunicación islandeses informaron de que aviones fletados por la CIA habían aterrizado en suelo islandés por lo menos en 67 ocasiones desde 2001. En esa época, el Ministerio Público no había examinado la cuestión a pesar de las peticiones para que se abriera una investigación oficial a fin de esclarecer la posible complicidad del Estado islandés en esos traslados ilegales. Desde entonces, parece ser que se han mantenido discusiones en la materia, y el Comité desearía saber cuáles fueron los resultados.

24. El Sr. WANG Xuexian (Correlator para el país), que aborda el examen de la aplicación del artículo 10 de la Convención por el Estado parte, observa con satisfacción que la legislación islandesa establece que los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz desplegadas en el extranjero están obligados a cumplir lo dispuesto en los instrumentos internacionales en los que Islandia es parte. Desearía saber si el Estado parte podría considerar la posibilidad de aplicar una recomendación del Centro de Derechos Humanos de Islandia para que se apruebe una disposición legislativa que establezca la obligación de impartir un curso sobre el derecho humanitario y los instrumentos de derechos humanos a los miembros de las fuerzas islandesas de mantenimiento de la paz en el marco de su capacitación.

25. Por lo que respecta a la capacitación de los guardias de fronteras –en su mayoría, guardacostas, debido a la especial configuración geográfica del Estado parte–, el Comité desearía saber si el Gobierno de Islandia ha aplicado la recomendación formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en sus observaciones finales sobre los informes periódicos 17º y 18º de Islandia, en la que se alentaba al Estado parte a que intensificara sus esfuerzos para proporcionar una capacitación sistemática a los guardias de fronteras en la protección de los refugiados y, en particular, para facilitarles información sobre la situación de los países de origen de los solicitantes de asilo(CERD/C/ISL/CO/18, párr. 11).

26. Según han informado algunas fuentes, en Reykiavik existe una cárcel que no cumple las normas mínimas, pues 16 celdas carecen de retretes o lavabos. Quizá la delegación pueda indicar si esa información es exacta y, de serlo, si se han adoptado medidas para corregir esa situación. Además, parece ser que la reclusión en régimen de incomunicación se impone de manera arbitraria y que el porcentaje de detenidos a los que se aplica esa medida es excesivo, lo que exige que la delegación formule una observación al respecto. Según informaciones facilitadas al Comité, dos menores se encontrarían actualmente en detención sin estar separados de los adultos. ¿Podría la delegación confirmar o refutar esa información?

27. En cuanto a la aplicación del artículo 13 de la Convención, el Comité desearía saber por qué se ha puesto fin a dos investigaciones que se habían iniciado sobre denuncias presentadas contra la policía. El Comité ha tomado buena nota de las aclaraciones presentadas por la delegación en relación con la aplicación del artículo 15 de la Convención, así como de la información que figura en el informe inicial (CAT/C/37/Add.2, párrs. 141 a 148), según la cual la legislación de Islandia no prohíbe de manera expresa el uso, en la presentación de pruebas, de una declaración que ha sido obtenida mediante tortura, pues el juez evalúa libremente esas pruebas. El Comité considera indispensable que la legislación del Estado parte se complete con una disposición que prohíba explícitamente el uso de declaraciones obtenidas mediante tortura en el marco de un proceso, ya que la existencia de tal disposición tiene un efecto disuasivo y, de ese modo, contribuye a prevenir la tortura.

28. En relación con la aplicación del artículo 16 de la Convención, el Correlator toma nota con satisfacción de las modificaciones introducidas en 2007 en el Código Penal, en virtud de las cuales la pena por actos de violencia sexual contra niños se elevó a 16 años de prisión, y muestra su sorpresa ante la pena establecida por violación de un adulto, de tan sólo dos años de prisión, sobre todo en vista de que, según han afirmado algunas fuentes, la incidencia de las violaciones es relativamente elevada en el Estado parte. Habida cuenta de la gravedad de ese tipo de actos, sería interesante saber por qué no se ha aumentado la pena impuesta por violación. Por último, la delegación quizá desee indicar si el Estado parte podría aplicar la recomendación de la Comisión Internacional de Juristas en la que se preconiza la aprobación de una disposición que tipifique las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

29. La Sra. BELMIR observa que, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Estado parte para trazar una línea de demarcación entre el poder judicial y el poder ejecutivo, sigue existiendo cierta confusión, sobre todo a nivel local, donde la administración puede tener atribuciones que, en principio, son competencia de los tribunales. Por ello, el Comité desea que el Estado parte prosiga sus esfuerzos para separar con más claridad aún los ámbitos de competencia de cada uno de esos poderes, con el objetivo de preservar el estado de derecho y garantizar la protección de las personas bajo su jurisdicción.

30. Los solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido rechazada y los extranjeros que han sido objeto de una medida de alejamiento del territorio solo pueden recurrir ante el Ministerio de Justicia. Pues bien, esa autoridad ejerce un control jurisdiccional sobre el procedimiento, pero no revisa el fondo de la decisión de las autoridades administrativas inferiores. Convendría saber si el Estado parte ha adoptado medidas para aplicar la recomendación formulada a ese respecto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en sus observaciones finales sobre los informes periódicos 17º y 18º de Islandia (CERD/C/ISL/CO/18), en la que se le invitaba a introducir una revisión a fondo por un órgano judicial independiente de las decisiones de la Dirección de Inmigración o del Ministerio de Justicia en relación con el rechazo de las solicitudes de asilo o la expulsión de los solicitantes de asilo (párr. 15).

31. En cuanto al acceso de todos a la justicia, resultaría útil saber si las personas pertenecientes a grupos marginados tienen acceso a una asistencia jurídica y son informadas de sus derechos. En relación con el mantenimiento del orden y la seguridad en los centros penitenciarios, el Estado parte ha indicado que el personal podía utilizar medios de coacción. Teniendo en cuenta que su utilización se deja a la libre apreciación de dicho personal, convendría saber si el recurso a esos medios es objeto de algún control –administrativo, disciplinario o judicial– y, en tal caso, qué órgano está facultado para ejercer ese control, sobre todo en vista de que el Estado parte autoriza el uso de pistolas neutralizantes que producen descargas eléctricas.

32. Según el párrafo 10 del informe, los reclusos en prisión preventiva son internados en los mismos locales que los penados cuando no se considera necesario aislarlos, práctica que, en opinión del Estado parte, no afectaría en absoluto a la presunción de inocencia y evitaría el aislamiento social de los reclusos en prisión preventiva. Para la Sra. Belmir, esos argumentos no son ni con mucho suficientes; las dos categorías de detenidos siempre deberían estar separadas. Además, según han informado algunas fuentes, parece ser que se han producido choques entre reclusos en prisión preventiva y penados. Por otra parte, en sus conclusiones y recomendaciones sobre el segundo informe periódico de Islandia, (CAT/C/CR/30/3), el Comité había manifestado su preocupación por el hecho de que la violencia entre los presos de un centro de detención del Estado parte había llevado a algunos detenidos a solicitar voluntariamente el régimen de incomunicación (párr. 8).

33. Por último, si bien el Estado parte ha hecho notables progresos en la esfera de la protección de los menores contra la violencia y la explotación, todavía no ha creado un sistema de justicia de menores, cuando el Comité de los Derechos del Niño había formulado una recomendación referida específicamente a esa cuestión en sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Islandia (CRC/C/15/Add.203, párr. 41 a)). Quizá la delegación pueda indicar si el Estado parte tiene previsto adoptar medidas para aplicar esa recomendación.

34. La Sra. KLEOPAS se une a las observaciones del Relator sobre la necesidad de incorporar en la ley una disposición que recoja una definición de tortura conforme a la del artículo 1 de la Convención y subraya que únicamente con esa disposición podrá el Estado parte cumplir plenamente las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, en particular sus artículos 2 y 4, y luchar eficazmente contra la impunidad de los autores de actos de tortura.

35. Por lo que respecta a la cuestión de la violencia doméstica, el Comité ha recibido información del Centro de Derechos Humanos de Islandia según la cual el Gobierno ha aprobado un plan de lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y los niños, pero los recursos asignados para

su ejecución son suficientes. El Comité invita a la delegación a describir el contenido de ese plan de acción y a presentar estadísticas sobre los casos de violencia sexual contra mujeres dentro del matrimonio y los abusos que sufren los niños en el seno de la familia.

36. La Sra. Kleopas observa con satisfacción que Islandia ha aprobado una ley sobre la trata de personas. No obstante, resultaría útil saber si se ha aprobado una legislación sobre asistencia a las víctimas y protección de testigos, y si los guardias de fronteras, los miembros del personal médico y los empleados de los servicios sociales reciben capacitación en materia de atención y acompañamiento de las víctimas de la trata.

37. El Sr. MARIÑO MENÉNDEZ destaca que la especial situación geográfica de Islandia hace que los migrantes sólo puedan llegar a ese país por vía marítima o aérea, por lo que los extranjeros que desean solicitar asilo o buscar trabajo en Islandia y que llegan en avión son objeto de un control sistemático en las aduanas. El Comité desearía saber si los extranjeros que llegan a Islandia tras haber pasado por un país del Espacio de Schengen son automáticamente devueltos a ese país, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Dublín, que prevé que los solicitantes de asilo deben presentar su solicitud en el primer país del Espacio de Schengen al que lleguen, o bien si las autoridades islandesas examinan las solicitudes caso por caso a fin de establecer si la devolución de un solicitante de asilo al primer país de tránsito no implicaría el riesgo de que este sea expulsado posteriormente a un tercer país en el que pueda ser sometido a tortura.

38. El Comité también desearía saber si los extranjeros que presentan en la aduana un documento de viaje expedido por un Estado del Espacio de Schengen pueden entrar en Islandia y si son objeto de una vigilancia especial. Según algunas informaciones, el Ministerio de Justicia puede decidir libremente la concesión de permisos de residencia por razones humanitarias, en particular cuando el solicitante no es nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. La delegación podría indicar si las solicitudes de permisos de residencia se tramitan de forma diferente en función de si el interesado procede o no de un Estado miembro de la Unión Europea. Por último, sería interesante saber si la decisión de las autoridades administrativas que se cita en el párrafo 20 de las respuestas escritas a la pregunta 7 de la lista de cuestiones que deben abordarse podría erigirse en norma para suplir la ausencia de disposiciones legales en materia de concesión de permisos de residencia por razones humanitarias.

39. La Sra. GAER pregunta si las autoridades competentes en materia de asilo evalúan el riesgo de tortura cuando examinan una solicitud de asilo en la que se invoca la existencia de dicho riesgo y, de ser así, cómo se lleva a cabo esa evaluación. Por otra parte, desearía obtener más información sobre la aplicación en la práctica de las normas relativas a la violencia entre presos elaboradas por el Director de la Administración de Prisiones y Libertad Condicional (párr. 59 del informe). Convendría saber, en particular, si los presos han presentado denuncias, si se han adoptado medidas para separar a determinados presos de otros y si se han llevado a cabo estudios sobre la violencia entre presos. Según la información complementaria que figura en el informe sobre la cuestión de los suicidios en los centros de detención (párrs. 49 a 51), al parecer no se ha iniciado ninguna investigación sobre incidentes de esa índole. Ahora bien, según una organización no gubernamental, en 2004 y 2005 se habrían producido dos casos de suicidio. Se invita a la delegación a que indique si esos dos incidentes fueron objeto de una investigación.

40. En lo que se refiere a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención por parte de Islandia, la oradora no llega a entender por qué, según las respuestas escritas (párr. 55), el Estado parte no considera oportuno encomendar a un órgano ya existente en el país –el Defensor del Pueblo o una organización no gubernamental– la función de inspeccionar periódicamente los centros de detención, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Facultativo. Resultaría interesante conocer en qué punto se encuentran las reflexiones en curso en el Estado parte sobre la creación de un mecanismo nacional de prevención.

41. En sus tres últimos informes, el Defensor del Pueblo ha lamentado que los organismos públicos tardan en responderle y enviarle los documentos que necesitaba para llevar a cabo sus investigaciones sobre las denuncias de torturas que le habían sido presentadas. Se invita a la delegación a que dé explicaciones sobre esa cuestión. En relación con el título V de la Ley núm. 49/2005 de cumplimiento de sanciones, que trata en particular de los cacheos, sería útil que la delegación aclarase si existen directrices para el examen de los orificios naturales y si ese tipo de registro, que puede percibirse como degradante, lo realiza personal especializado, en aras de proteger la intimidad del interesado.

42. El PRESIDENTE dice que volverá a abordar la importante cuestión de la definición de tortura. Muchos Estados argumentan que las calificaciones penales de diversos actos pueden servir para reprimir los actos de tortura. Ahora bien, lo importante es que la legislación penal contemple el término “tortura”, ya que no es posible interpretar por analogía que disposiciones relativas, por ejemplo, a actos de violencia, pueden abarcar actos de tortura. Para reprimir la tortura, es necesario que esta se califique como tal en la ley. Todas las sentencias deben describir con precisión la calificación del delito, y esa calificación debe interpretarse de modo estricto. La obligación de prevenir la tortura trasciende las fronteras de los Estados, y el Comité ha reiterado en diversas ocasiones su convicción de que, si todos los Estados enunciaran una definición de tortura en su legislación penal, se promovería ampliamente la causa de la erradicación de la tortura.

43. El Centro de Derechos Humanos de Islandia ha llamado la atención del Comité sobre el hecho de que el artículo 45 de la nueva Ley de extranjería, que prohíbe la devolución de extranjeros a regiones en las que tengan motivos para temer su persecución, contemplaba una excepción en el caso de los extranjeros considerados peligrosos para la seguridad nacional. La prohibición prevista en el artículo 3 de la Convención se aplica a todos los extranjeros que corren el riesgo de ser sometidos a tortura, y si las autoridades consideran que una persona concreta representa un peligro para la seguridad nacional, existen otros medios para proteger al país distintos de la devolución del interesado a un país en el que peligra su integridad física. Además, el concepto de seguridad nacional es muy amplio y debería aclararse.

44. Se ha hecho hincapié en la cuestión de la capacitación sistemática de los miembros de las fuerzas armadas islandesas llamados a participar en operaciones de mantenimiento de la paz. En esa esfera, la participación de la sociedad civil adquiere una gran importancia. Lo mismo ocurre con la capacitación de los guardias de fronteras, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha pedido a Islandia que intensifique.

45. El Centro de Derechos Humanos de Islandia ha señalado un caso en el que un solicitante de asilo había permanecido detenido durante cuatro días sin poder impugnar su detención ante una autoridad. Quizá la delegación de Islandia pueda proporcionar alguna información al respecto.

46. En la actualidad, la cuestión del terrorismo resulta especialmente importante, y, si bien la lucha contra el terrorismo, que ninguna causa podría jamás justificar, es sin duda legítima, es necesario circunscribir lo que se entiende por acto de terrorismo. Habría que saber si se tiene intención de limitar la definición actual de terrorismo, que algunos consideran excesivamente amplia.

47. El Presidente invita a la delegación de Islandia a responder a las preguntas y propone concederle algún tiempo para preparar sus respuestas.

Se suspende la sesión a las 11.40 horas y se reanuda a las 12.05 horas.

48. La Sra. KRISTINSDÓTTIR (Islandia) dice que la delegación hará todo lo posible por responder a las preguntas, pero que algunas cuestiones se transmitirán al Gobierno de Islandia para que dé una respuesta posteriormente.

49. En lo que se refiere al régimen aplicable a los extranjeros en virtud de los Acuerdos de Dublín, por una parte, y del Acuerdo de Schengen, por otra, cabe señalar que se trata de cosas distintas. Islandia forma parte del Espacio de Schengen, lo que significa que sus fronteras están abiertas a todos los extranjeros, ya sean miembros de la Unión Europea o de un tercer país, pero procedentes de un país del Espacio de Schengen. En las fronteras no se ejerce control alguno, pues dicho control tiene lugar en las fronteras exteriores comunes. Así pues, un extranjero proveniente de Alemania, pero originario de un tercer país, no es sometido a control alguno. La situación es diferente para los extranjeros de un tercer país que llegan a Islandia procedentes del Reino Unido o Irlanda, países que no forman parte del Espacio de Schengen. Esos extranjeros son sometidos a un control en las fronteras en virtud de los Acuerdos de Dublín. Islandia se esfuerza por aplicar los Acuerdos de Dublín de forma coherente, y las autoridades participan activamente en los trabajos de los grupos de expertos que se ocupan de los aspectos prácticos de la aplicación de esos Acuerdos. Las autoridades islandesas están obligadas a no admitir a los extranjeros de que se trate en su territorio cuando así lo exijan las disposiciones de los Acuerdos.

50. Por lo que respecta al número de solicitudes de asilo aceptadas que, según el Comité, es bajo, cabe señalar que Islandia acoge a un número relativamente alto de refugiados que le son enviados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en cooperación con la Cruz Roja islandesa. El Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Asuntos Sociales firmaron recientemente nuevos acuerdos para acoger a otros grupos de refugiados. Islandia acoge a entre 30 y 40 personas al día, lo que es mucho para un país que apenas tiene 300.000 habitantes. Aunque el número de casos en que se concede el asilo puede parecer reducido, lo cierto es que el número de solicitudes también lo es. Ello puede deberse a que Islandia no es el país de primera elección para las personas procedentes de países con un clima menos riguroso. Es posible que las personas que cumplen las condiciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados hayan encontrado un país de acogida antes de llegar a Islandia. Pero es errónea la idea de que Islandia no garantiza una buena protección a los solicitantes de asilo, pues hace muy poco llegó una familia de tres personas que obtuvo asilo.

51. En cuanto a los menores no acompañados, Islandia participa en los trabajos del Consejo de Estados del Mar Báltico, y en particular en los trabajos sobre la trata de seres humanos. En 2003 se elaboró un plan de acción dedicado a la cuestión de los menores no acompañados que aplican todos los órganos de policía y las autoridades de inmigración. No obstante, desde 2003 sólo se han presentado dos casos de menores no acompañados.

52. Con la definición de violencia doméstica sucede lo mismo que con la definición de tortura. La introducción de definiciones estrictas es contraria a las tradiciones jurídicas del país. Son muchos los conceptos que no precisan definición; las palabras tienen un sentido conocido que ha sido interpretado, en particular, por los tribunales, así como en las exposiciones de los motivos de las leyes y también en la práctica. Por tanto, no es necesario introducir una definición.

53. El Sr. JÓNSSON (Islandia) responderá primero a la pregunta sobre las medidas adoptadas por el Gobierno a raíz de las alegaciones de que en el espacio aéreo islandés se han efectuado vuelos ilegales. El Ministro de Relaciones Exteriores llevó a cabo un estudio para determinar la veracidad de esas alegaciones, pero en dicho estudio no se establece que se hayan efectuado esos vuelos. A pesar de ello, se creó un grupo de consulta interministerial para determinar si, en aquel momento, se habían aplicado correctamente los procedimientos de vigilancia. Dicho grupo de consulta concluyó que los procedimientos se habían cumplido; no obstante, se propuso introducir una modificación en el manual destinado a los pilotos de líneas aéreas, quienes, desde entonces, tienen la obligación de informar a las autoridades si llevan a bordo presos cuando sobrevuelan Islandia.

54. En relación con la capacitación en derechos humanos de los militares llamados a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz, en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe un grupo especial encargado del reclutamiento, la capacitación y el despliegue de los miembros de los contingentes de mantenimiento de la paz. Antes de ser enviados a su lugar de destino, los militares han de suscribir un código de conducta muy parecido a las normas de las Naciones Unidas. La ley no recoge ninguna disposición relativa a la capacitación en derechos humanos destinada a ese personal, pero las autoridades se han propuesto elaborar una nueva política en materia de derechos humanos que obligue a todo el personal a seguir una capacitación básica y a tener determinados conocimientos en la materia. Los miembros de los contingentes de mantenimiento de la paz quedarán abarcados por esa nueva política, que debería comenzar a aplicarse antes de que finalice el año.

55. La Sra. KRISTINDÓTTIR (Islandia) ofrece aclaraciones sobre la cuestión de los guardacostas y los guardias de fronteras. El personal de esas dos categorías ejerce poderes de policía. Los encargados del control de pasaportes en los aeropuertos reciben una capacitación especial para ocuparse de las personas procedentes de todo el mundo, para detectar los documentos falsificados, evidentemente, pero también para reconocer los indicios de trata de personas. Islandia es miembro de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex), que organiza programas de capacitación dirigidos a los guardias de fronteras. Los guardias de fronteras islandeses se benefician de esos programas.

56. Al Comité le preocupa el número de personas en detención preventiva recluidas en régimen de incomunicación, que considera elevado. Es posible que se haya producido un malentendido, ya que esa cifra es en realidad baja, pues de las 17 personas que se hallaban en detención preventiva en 2006, 3 se encontraban en régimen de incomunicación.

57. En lo que se refiere a los motivos por los que pueden suspenderse las investigaciones sobre las denuncias contra la policía, cabe señalar que, en la mayoría de los casos, se descubre muy poco después de la presentación de esas denuncias contra la policía que estas carecen de fundamento; en otros casos, también numerosos, la persona que había presentado la denuncia la retira. Por ello, resulta lógico que se suspenda la investigación. En cambio, todas las denuncias presentadas contra la policía se registran como tales, independientemente de que den lugar a una investigación posterior o no.

58. Al Comité le preocupa que se transmitan al juez toda clase de pruebas. Una norma de derecho, que tiene valor constitucional en Islandia, es que cualquier prueba, aun cuando se haya obtenido por medios ilegítimos, debe ponerse en conocimiento del juez, el cual tiene en cuenta, evidentemente, la forma en la que se ha obtenido la prueba y adopta la decisión que corresponde.

59. La Sra. HELGADÓTTIR (Islandia) dice, en relación con el encarcelamiento de menores, que, efectivamente, dos jóvenes de 17 años se encuentran detenidos en prisiones para adultos, cuyas celdas, en determinados casos, carecen de retrete. Una de ellas, la de Kvjabryggja, es una institución de régimen abierto, mientras que la otra, la de Skólavörðustigur, está reservada a penados por infracciones menores. Cabe señalar que la Dirección de Protección de la Infancia había intentado en vano colocar en centros a esos menores antes de que fueran encarcelados.

60. Los policías han comunicado a través de las asociaciones de policías su deseo de estar equipados con pistolas neutralizantes, que les resultarían útiles en determinadas circunstancias. Sin embargo, las autoridades competentes no han resuelto esa cuestión, y la oradora mantendrá informadas a las autoridades islandesas acerca de la opinión del Comité al respecto.

61. Si bien es cierto que no existe ningún mecanismo de vigilancia independiente encargado de inspeccionar las instituciones psiquiátricas, cabe señalar que el Director General de los Servicios de Salud es responsable de todos los hospitales del país, incluidos los psiquiátricos. Además, se ha creado un comité encargado de recibir las denuncias relativas al funcionamiento del sistema de salud. El Defensor del Pueblo podría sin duda desempeñar una función de supervisión en esa esfera, pero carece del personal necesario. Para aplicar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, Islandia tiene previsto crear un comité independiente al que se encomendaría ese mandato de supervisión, y actualmente reflexiona sobre su composición.

62. La Sra. KRISTINSDÓTTIR (Islandia) manifiesta que los solicitantes de asilo a menudo argumentan que corren el riesgo de ser torturados en su país de origen y alegan ser originarios de un país distinto de su verdadero país de origen. En cualquier caso, todos ellos son escuchados y sus argumentos son examinados a fin de que las autoridades competentes puedan pronunciarse con conocimiento de causa. Un solicitante de asilo incluso recurrió al Tribunal de Reykjavík en abril de 2008, invocando que corría el riesgo de ser sometido a esclavitud si era devuelto a su país de residencia; el tribunal abrió una investigación al respecto, que sigue en curso.

63. La cuestión de la violencia entre detenidos es objeto de una vigilancia especial por parte de la Administración de Prisiones y Libertad Condicional (párr. 29) y los celadores prestan especial atención a ese problema. Se sigue de cerca el problema de los suicidios en la cárcel, y se abre una investigación por cada fallecimiento de detenidos. Los resultados de la investigación sobre el reciente fallecimiento de un detenido revelaron que el fallecimiento se había debido a causas naturales y no a un acto criminal.

64. Por lo general, los procedimientos administrativos resultan menos prolongados que los procedimientos judiciales, y los organismos públicos, que suelen estar desbordados de trabajo, tardan en responder a las solicitudes de información del Defensor del Pueblo sobre las denuncias por tortura que recibe, pues a menudo tramitan con carácter prioritario las denuncias procedentes de particulares.

65. Los cacheos practicados a los detenidos –y, en particular, el examen de los orificios naturales– se rigen por normas estrictas. Las personas que los visitan también pueden ser sometidas a cacheos, si se considera justificado.

66. En cuanto a la división de poderes, cabe señalar que en Islandia, como en otros países nórdicos, el Fiscal General –al igual que la policía que le presenta sus informes– depende del poder ejecutivo. Así pues, corresponde al Fiscal ordenar la apertura de una investigación policial, excepto en los casos de delitos menores, como las infracciones al Código de la Circulación (conducir en estado de ebriedad, por ejemplo), en los que la policía está facultada para iniciar acciones judiciales. De ese modo, el poder judicial nunca podrá tomar la iniciativa de incoar acciones judiciales, ya que esa responsabilidad corresponde al poder ejecutivo, y al Fiscal le compete sustentar los argumentos ante el juez. Por último, no se ha señalado ningún caso de utilización de pistolas neutralizantes en las cárceles.

67. La Sra. SVEAASS (Relatora para el país) da las gracias a la delegación por sus respuestas y felicita al Estado parte por haber adoptado una serie de medidas de orden jurídico desde que presentó su segundo informe periódico, entre ellas, la Ley de cumplimiento de sanciones, de 2005, la integración en el Código Penal de una disposición relativa a la trata de seres humanos, así como la firma, en mayo de 2005, del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Asimismo, acoge con satisfacción la aprobación, en 2002, de la Ley de extranjería, que es más bien favorable a la no devolución de extranjeros a su país de origen.

68. La oradora lamenta que el Estado parte no haya aportado, en su informe o sus respuestas escritas, mayores aclaraciones sobre la colaboración que mantiene con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las cuales permitirían al Comité hacerse una idea más precisa de la protección que Islandia brinda a las personas perseguidas en su país de origen.

69. El Comité ha tomado buena nota de las observaciones de la delegación sobre la cuestión de la competencia universal y, en particular, sobre si, según el Estado parte, el responsable de un partido político que se haya declarado culpable de un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad puede ser perseguido en un país distinto de aquel en que se haya cometido dicho crimen. El Estado parte podría facilitar información complementaria por escrito sobre el curso dado al caso del Sr. Luo Gan, alto responsable del Partido Comunista chino que fue objeto de acciones judiciales durante su visita a Islandia por su presunta implicación en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de tortura cometidos en su país. Por último, se invita a la delegación a indicar en qué punto se encuentra Islandia en lo referente a la creación de mecanismos de vigilancia independientes encargados de inspeccionar las instituciones psiquiátricas para prevenir los actos de tortura y los malos tratos en ellas.

70. El Sr. WANG Xuexian (Correlator para el país) dice que ha tomado buena nota del número de personas en régimen de incomunicación que menciona la delegación, pero que el Centro de Derechos Humanos de Islandia ha transmitido un cuadro, del que se desprende que casi un 90% de los detenidos son recluidos en régimen de incomunicación por períodos de duración variable, cuyo promedio fue de cuatro semanas en 2001.

71. No cabe duda de que, en la práctica, las declaraciones obtenidas mediante tortura quedan excluidas de las pruebas utilizadas en el marco de los procedimientos judiciales, sin embargo, cabe preguntarse si no sería preferible incluir en la legislación una disposición que prohíba específicamente el recurso a ese tipo de pruebas.

72. La Sra. BELMIR dice que no ha recibido respuesta a varias de sus preguntas, en particular las relativas a las funciones del magistrado y del Fiscal de la República y a la necesidad de que el Estado parte introduzca una revisión a fondo por un órgano judicial independiente por lo que respecta a los solicitantes de asilo que han visto rechazada su solicitud, de conformidad con la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. La delegación también podría indicar la razón exacta por la que se recluye en los mismos departamentos de la cárcel a las personas en detención preventiva y los penados, y el motivo de que no exista un auténtico sistema de justicia de menores.

73. Por último, en referencia al párrafo 30 del informe objeto de examen, la oradora desearía saber por qué la autorización para grabar el interrogatorio de sospechosos y testigos en cintas sonoras, videocintas o disco óptico (DVD) protege a la policía, cuando, por lo general, es a los testigos y sospechosos a quienes se debe proteger. La grabación de los interrogatorios es algo muy positivo, siempre que se practique siguiendo normas rigurosas.

74. La Sra. KLEOPAS reitera su pregunta acerca del plan de lucha adoptado por el Estado parte para combatir la violencia ejercida contra las mujeres y los niños, y desearía saber cuántas denuncias de violencia doméstica se han presentado. Asimismo, desearía saber qué protección ofrece la Ley sobre trata de seres humanos a las víctimas, y cuál es el procedimiento que se sigue para identificarlas.

75. La Sra. KRISTINSDÓTTIR (Islandia) dice que las cifras que figuran en el cuadro del Centro de Derechos Humanos de Islandia son incorrectas, y que no representan el número de detenidos en régimen de incomunicación, sino el número total de detenidos en Islandia, al tiempo que reitera que la reclusión en régimen de incomunicación se aplica en contadas ocasiones.

76. La violación se sanciona con una pena que puede llegar hasta los 16 años de prisión, pero, en la práctica, las penas que se imponen son generalmente mucho menos severas. Si bien es cierto que se han impuesto penas de tan solo uno o dos años de prisión, actualmente se tiende más bien a imponer penas de cinco años. La delegación de Islandia presentará en fecha ulterior información complementaria sobre el plan de acción dirigido a luchar contra la violencia ejercida contra las mujeres y los niños, así como sobre el plan de acción dirigido a luchar contra la trata de seres humanos y su financiación.

77. Por lo que respecta a los procedimientos de recurso contra una decisión de rechazar una solicitud de asilo, hay que señalar que las decisiones de la Dirección de Inmigración, que es un órgano administrativo, pueden recurrirse ante el Ministerio de Justicia, que también es un órgano administrativo. El solicitante de asilo que desee impugnar esa decisión puede llevar su caso ante los tribunales en dos instancias: los tribunales inferiores y el Tribunal Supremo. De ese modo, la decisión puede ser revisada cuatro veces en total, dos ante órganos administrativos y dos ante órganos judiciales. Los solicitantes de asilo que prefieran evitar un procedimiento judicial también pueden acudir al Defensor del Pueblo al término del procedimiento administrativo.

78. En relación con la cuestión de las grabaciones de menores con fines de protección, conviene distinguir dos casos: por una parte, la grabación de los interrogatorios que permite tanto a los agentes de policía como a las personas interrogadas demostrar lo que realmente sucedió en la comisaría de policía en caso de denuncia de actos de tortura y malos tratos, y por otra, la grabación del interrogatorio a puerta cerrada de un niño que declara haber sido víctima de actos de violencia o abusos sexuales.

79. El PRESIDENTE da las gracias a la delegación de Islandia por las exhaustivas respuestas que ha dado en el marco del fructífero diálogo instaurado con el Comité. Tras haber concluido el examen del tercer informe periódico de Islandia, el Comité espera con interés seguir colaborando con el Estado islandés.

80. *La delegación de Islandia se retira.*

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
